



CEM: 01-02-0918-2018

Maturín, 21 de Noviembre de 2018

Ciudadana

MARINELLYS MENDEZ CENTENO

Director de Auditoría Interna (E) de la

Gobernación del estado Monagas

Calle Monagas, Palacio de Gobierno

Frente a la Plaza Bolívar

Maturín, estado Monagas

Teléfono 0416-6220665



*Recibido Por
Esther Calzadilla
22/11/2018
11:33*

Me dirijo a Usted, en la oportunidad de saludarle y al mismo tiempo dar respuesta a la solicitud formulada a este Órgano de Control Fiscal, mediante Oficio N° DAI:120/2018, de fecha 05 de Noviembre de 2018, emanado de esa Dirección de Auditoría Interna, mediante el cual solicita un pronunciamiento oficial con respecto a si los auditores de la Contraloría y Unidades de Auditorías Internas, son funcionarios públicos de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción, como lo contemplan los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En tal sentido, y atendiendo a la disposición contenida en el artículo 136, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el principio de colaboración que debe existir entre los Órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público, en aras de coadyuvar en la realización de los fines de Estado, pasa este Organismo a emitir sus consideraciones respecto a la solicitud formulada, lo cual queda expuesto seguidamente:

Conforme el artículo 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada estado tendrá una Contraloría, que gozará de autonomía orgánica y funcional, para que ejerza de conformidad a la propia Constitución y a la Ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estatales.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido de manera pacífica y reiterada la autonomía funcional de la Contraloría General de la República, igualmente atribuida a las Contralorías de Estado, que permite que a esta clase de órganos se les reconozca una potestad reglamentaria para ordenar y dirigir todo lo concerniente a su organización y funcionamiento, desprendida de cualquier tutelaje por parte de los restantes órganos del Poder Público Estatal (Sentencia de fecha 11/04/2002, expediente 01-1429 y Sentencia de fecha 31/03/2005, expediente 04-1471).

"Hacia la transparencia, fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal"



Del mismo modo, se ha entendido la autonomía funcional como aquella que otorga libertad a dichos Órganos para que realicen la actividad que les resultan inherentes dentro de su ámbito de competencias, delimitado constitucional y legalmente.

En este mismo orden de ideas, debe resaltarse que la **Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal** (G.O.R.B.V Nro Extraordinario 6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010), refiere lo concerniente a las funciones y autonomía de las Contralorías de los Estados, a saber:

Artículo 44. Las Contralorías de los estados, de los distritos, distritos metropolitanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades centralizadas y descentralizadas sujetos a su control, de conformidad con la Ley, y a tales fines gozarán de autonomía orgánica, funcional y administrativa. (Subrayado nuestro)

De igual manera, es preciso hacer mención a la Sentencia N° 1300 de fecha 26 de junio de 2007; emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Contraloría del Estado Monagas vs Yamilka Campos, a través de la cual se ratificó, tanto la Autonomía Orgánica y Funcional de la que gozan las Contralorías de los Estados, como la facultad de éstas para dictar o aplicar, con sujeción al ordenamiento jurídico general, su propia regulación especial expresa y vigente en materia del personal dictada al efecto.

Lo anterior conlleva a afirmar, sin ningún género de dudas, que las Contralorías Estadales son Órganos esencialmente técnicos, los cuales en atención a su autonomía, deberán dictar las normas que recojan las potestades que le permitan organizarse, a los fines de ejercer las atribuciones que le correspondan, y que además se encuentran insertos en el Sistema Nacional de Control Fiscal, cuyo Órgano rector es la Contraloría General de la República. En consecuencia, debe entenderse, que la autonomía es la capacidad que tienen éstas para dictar sus propias normas (autonormación), válidas en el orden jurídico imperante, destacando, dentro de los factores que determina la competencia, como atributo esencial de la autonomía y la independencia.

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G.O.R.B.V Nro Extraordinario 6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010), establece las competencias de las Unidades de Auditoría Interna, bajo los siguientes términos:

Artículo 41.- Las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus competencias, podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones

"Hacia la transparencia, fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal"



de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.

Del análisis a la norma antes transcrita, se infiere que las Unidades de Auditoría Interna se han de constituir como dependencias altamente calificadas, de asesoría y apoyo en el control de la administración del Ente u Organismo, mediante la práctica de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza; en aras de asegurar la eficiencia en el cumplimiento de la misión institucional, con estricto apego a valores fundamentales de ética pública, moral administrativa, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es preciso hacer mención a la disposición contenida en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que preve lo concerniente a los cargos de confianza, y cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 21. Los cargos de confianza serán aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública de los viceministros o viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o directoras o sus equivalentes. También se consideraran cargos de confianza aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, Aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en la Ley. (Subrayado nuestro)

A la luz de la norma antes transcrita, son considerados cargos de confianza aquellos que en el ejercicio de sus funciones supongan un elevado grado de reserva y confiabilidad, tomando en cuenta las funciones, tareas o actividades típicas que de manera preponderante desarrolla quien ejerce el cargo en cuestión, incluyéndose dentro de esta categoría, aquellos cuyos titulares de cargos cuyas funciones impliquen inspección o fiscalización.

En igual contexto, el artículo 53 de la misma Ley que señala:

Artículo 53. Los cargos de alto nivel o de confianza quedaran expresamente indicados en los respectivos reglamentos orgánicos de los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional.

"Hacia la transparencia, fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal"



Del contenido de la norma antes expuesta, se infiere que los cargos de confianza quedarán indicados en aquellos instrumentos normativos que al efecto dicten los Órganos y Entes de la Administración Pública.

Tomando en consideración lo expuesto en el presente oficio, los funcionarios que ejerzan funciones de control, fiscalización e inspección, a tenor de lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia, son considerados funcionarios de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción, pues sus funciones implican una alta responsabilidad y una máxima confidencialidad para el funcionario que lo ejerza; ello sin menoscabo del reconocimiento de los derechos laborales que le son propios.

De esta manera, queda expuesta la opinión de esta Contraloría Estatal respecto a la solicitud formulada referente a los funcionarios públicos de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción.

Finalmente, reiterándole el apoyo y colaboración que debe prevalecer en los Órganos que conformamos la Administración Pública Estatal, se suscribe de Usted.



Resolución N° 01-00ap00159, de la Contraloría General de la República del 18-09-2013
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.254 del 19-09-2013

"Hacia la transparencia, fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal"